

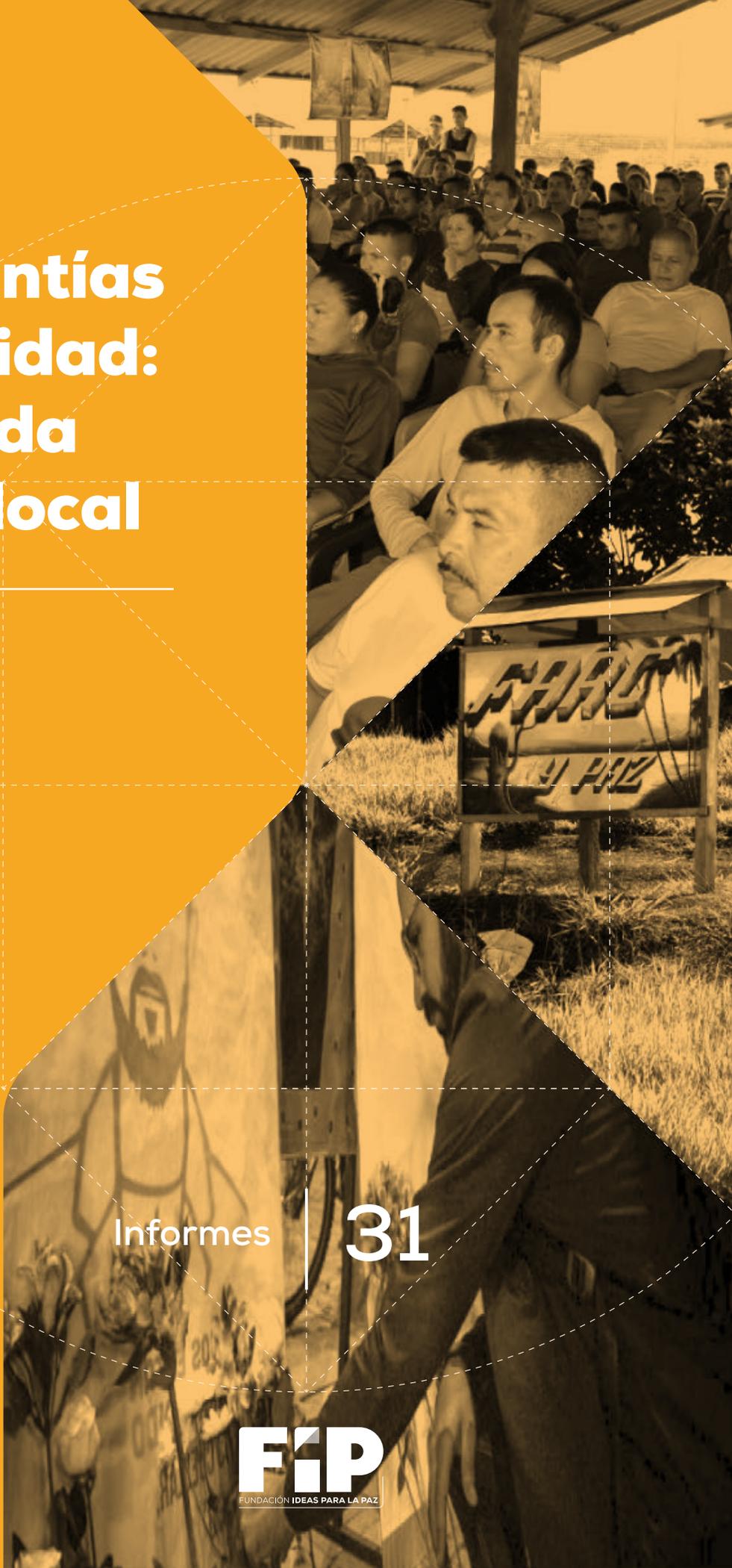
Las Garantías de Seguridad: una mirada desde lo local

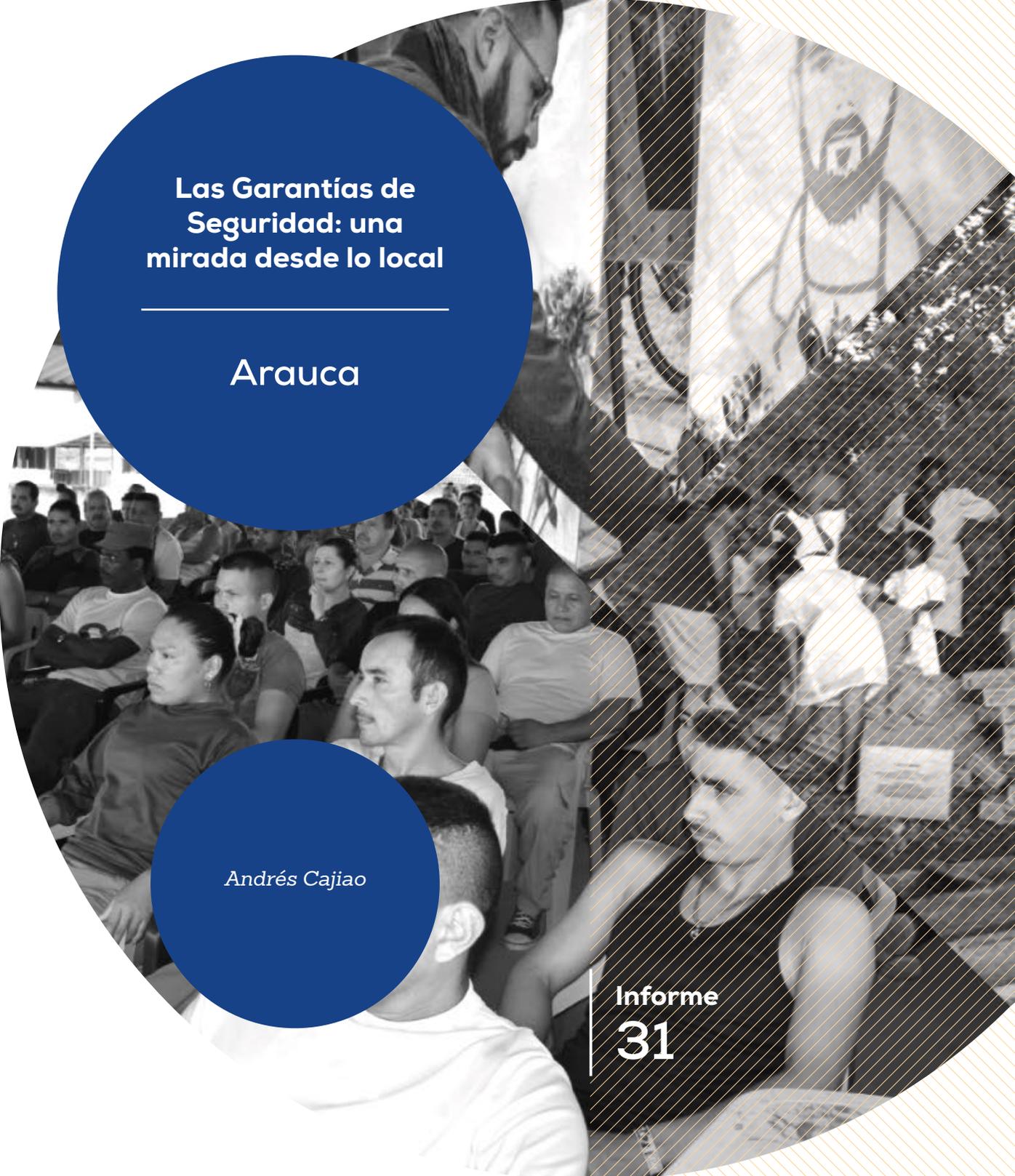
Arauca

Informes

31

FIP
FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ





Las Garantías de
Seguridad: una
mirada desde lo local

Arauca

Andrés Cajiao

Informe
31

Bogotá, Septiembre 2018

Las Garantías de Seguridad: una mirada desde lo local

Arauca

Directora Ejecutiva de la FIP

María Victoria Llorente

Director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

Juan Carlos Garzón

Autor*

Andrés Cajiao

Edición y corrección de estilo

Elizabeth Reyes y Martín Franco

Fotografías

OCHA, Prensa Rural y Misión ONU en Colombia

Diseño y diagramación

Ladoamable Ltda

www.ladoamable.com

ISBN

978-958-5517-05-9

Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Calle 100 No. 8A – 37 Torre A. Of. 305. Bogotá

Tel. (57-1) 218 3449

www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

-
- **Con el apoyo de:**
-



-
- **Serie Informes No. 31 / Septiembre 2018**
-

(*) El proyecto de investigación en el cual se enmarca este informe contó con la dirección de Eduardo Álvarez Vanegas hasta marzo de 2018, fecha hasta la cual coordinó el Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP. La FIP y los autores agradecen sus aportes y lineamientos.

Contenido

6

INTRODUCCIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS
DE SEGURIDAD EN ARAUCA

9

**1. LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN UN
CONTEXTO DE CONTINUIDAD Y
REACOMODO DE ACTORES ARMADOS**

14

**2. CONFLICTOS EMERGENTES Y
NO RESUELTOS**

17

**3. AGRESIONES A LÍDERES SOCIALES EN
MEDIO DE LA CONFRONTACIÓN DE
LOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES
POR TOMAR EL CONTROL SOCIAL Y
TERRITORIAL**

19

**4. EL PAPEL DE LAS FARC EN LAS
GARANTÍAS DE SEGURIDAD**

21

**5. LA COMPETENCIA POR EL PODER
POLÍTICO CON UN ACTOR QUE
CONTINÚA EN ARMAS**

23

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agradecimientos

Los autores agradecen a todas las personas que participaron en las entrevistas y conversaciones informales en diferentes partes del país, quienes con sus aportes guiaron y ayudaron a estructurar este informe. Igualmente, a las organizaciones sociales, organismos internacionales y agencias humanitarias, así como funcionarios, servidores públicos y periodistas. Sus opiniones, ideas y testimonios facilitaron el trabajo de campo y fueron un insumo esencial para la elaboración de este informe.

Asimismo agradecen el apoyo de la asistente de investigación Paula Tobo y los pasantes Daniel Trejos, Salomé Hernández y Valentina Muñoz por su contribución al proceso de sistematización. De igual manera, al Área de Gestión del Conocimiento de la FIP y a Boris Ramírez cuyo apoyo técnico facilitó la organización de la información.

Introducción

Implementación de las Garantías de Seguridad en Arauca

Más de un año después de la firma del Acuerdo de Paz y el posterior desarme de las FARC, la perspectiva sobre los riesgos para las Garantías de Seguridad de los excombatientes, sus familiares y las comunidades en Arauca se ha transformado. Los actores en el territorio pasaron de la esperanza en el Acuerdo y su implementación, al miedo por la reactivación del conflicto y la confrontación armada.

Con la firma del Acuerdo disminuyeron las acciones armadas y los riesgos asociados al conflicto. No obstante, según los entrevistados, aún existen amenazas para la reincorporación y el territorio asociados al surgimiento y profundización de conflictividades sociales. Si bien estos conflictos continúan latentes, han pasado a un segundo plano dando lugar a riesgos relacionados con el fortalecimiento de los actores armados y a las dinámicas propias del conflicto y la violencia.

Para entender estos nuevos escenarios, es necesario tener claro el panorama en el que se encuentra Arauca. Por un lado, el proceso de reincorporación ha tendido avances positivos. Según cifras de la OACP, para marzo de 2018 el Espacio Territorial “Martín Villa”, en Arauquita, contaba con 390 ex miembros de las FARC (La Paz en el Terreno, 2018). A mayo del mismo año, según los entrevistados, se lograron mantener más de la mitad de excombatientes, 267 de 426, quienes han expresado una real motivación en quedarse y continuar su proceso de reincorporación.

La gran mayoría de los excombatientes que han salido del ETCR continúan en el departamento y son monitoreados por la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad que los tiene ubicados y realiza visitas a sus lugares de residencias para comprobar las condiciones en que viven. Esta población no es ajena al territorio y las comunidades, puesto que son de la zona, lo que ha servido en su

Con la firma del Acuerdo, en Arauca disminuyeron las acciones armadas y los riesgos asociados al conflicto. No obstante, aún existen amenazas para la reincorporación y el territorio asociados al surgimiento y profundización de conflictividades sociales

proceso de reincorporación a la comunidad. Gran parte de esos excombatientes volvieron a sus familias y retornaron a las veredas en donde habían sido reclutados. Según organizaciones encargadas del monitoreo consultadas, el número de excombatientes que entraron al proceso y se encuentran en las disidencias es reducido.

Este proceso de reincorporación contrasta con la situación de los actores armados. El ELN se consolidó tomando las zonas de antigua presencia de las FARC e imponiendo un nuevo orden. A la par con su establecimiento en Arauca, durante finales de 2017 y principios de 2018, se expandió hacia otras zonas del país y Venezuela. Por ejemplo, aprovechó el cese al fuego bilateral y la suspensión de acciones de la Fuerza Pública, para consolidar su presencia en el municipio de Cumaribo, Vichada, donde se estableció el frente Rafael Blanco Flórez (El Tiempo, 2018; Ejército Nacional, 2018) y fortaleció su proceso de expansión y consolidación en la frontera con Venezuela, desde el estado de Apure —zona histórica de esta guerrilla—, hacia el de Amazonas (Álvarez, Pardo, & Cajiao, 2018).

Durante el primer año y medio de la implementación, que comenzó a finales de 2016, Arauca pasó de tener un pequeño grupo de combatientes, que salieron de la entonces zona veredal y conformaron un grupo disidente que operaba en La Victoria (Venezuela), a una estructura fortalecida que, en los primeros meses de 2018, ya operaba entre Saravena, Fortul, Arauquita, Tame y Puerto Rondón. El fortalecimiento y expansión de esta disidencia se ha convertido, según los entrevistados, en el principal riesgo para la seguridad del territorio opacando otros conflictos sociales que inicialmente se percibían relevantes, como las tensiones por la tierra y el relacionamiento de las comunidades con los desmovilizados de las FARC.

La conflictividad también se ha agravado por cuenta de la migración desde Venezuela. La llegada masiva de colombianos que retornan, y sobre todo de venezolanos, ha aumentado la percepción de inseguridad. En repetidas ocasiones los entrevistados manifestaron el incremento de robos e inseguridad en zonas urbanas y rurales. Esta percepción negativa sobre la llegada de población migrante, ha dado lugar a la creciente estigmatización y rechazo hacia esta población; especialmente por parte de sectores del comercio que ven afectados sus ingresos por el contrabando y venta de productos traídos desde el vecino país.

El proceso no controlado de migración también ha sido aprovechado por los actores armados: tanto el ELN como la disidencia de las FARC están reclutando migrantes venezolanos para fortalecer su pie de fuerza y presencia en el territorio. Aprovechando su condición de vulnerabilidad, los vinculan como informantes y combatientes.

En el plano institucional, Arauca plantea un escenario de débil presencia del Estado en gran parte del departamento, con una notable incapacidad para proveer bienes y servicios públicos a la población. Según algunos entrevistados, las instituciones departamentales y municipales no cuentan con la capacidad ni la articulación con el gobierno central para implementar el Acuerdo de Paz en el territorio. Para la Defensoría del Pueblo, *“el departamento de Arauca aún no cuenta con una institucionalidad que pueda atender las necesidades de la población en todo el territorio, siendo esta circunstancia un factor —entre otros muchos— que ha facilitado la aparición, posicionamiento y consolidación de grupos armados ilegales que ejercen violencia y regulan la convivencia ciudadana”* (Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, 2017, pág. 17).

De acuerdo con la evolución de las dinámicas territoriales, la FIP identifica cinco elementos clave que tienen impactos en las Garantías de Seguridad en Arauca: 1) su implementación en un contexto de continuidad y el reacomodo de los actores armados; 2) los conflictos emergentes y no resueltos; 3) las agresiones a líderes sociales en medio de la confrontación de los grupos armados ilegales por el control social y territorial; 4) el papel de los liderazgos de las FARC, y 5) la competencia por el poder político con un actor que continúa en armas.

En el plano institucional, Arauca plantea un escenario de débil presencia del Estado, con una notable incapacidad para proveer bienes y servicios públicos

1. La implementación de las Garantías de Seguridad en un contexto de continuidad y reacomodo de actores armados

La implementación de las Garantías de Seguridad en Arauca se da en un contexto de continua presencia de actores armados de gran envergadura, como el ELN, y el surgimiento de nuevas estructuras, como las disidencias. Los escenarios de riesgo que se presentan por la presencia de estos grupos evolucionan de acuerdo con los cambios en las dinámicas e interacciones entre los distintos actores armados. Por eso, las percepciones frente a los riesgos para la seguridad de excombatientes y las comunidades se han transformado con el proceso de reorganización del ELN y el fortalecimiento y consolidación de las disidencias.

Desde la desmovilización de las estructuras armadas de las FARC, el ELN inició un proceso de expansión hacia las zonas de mayor presencia de este antiguo grupo guerrillero. Dicha expansión vino acompañada de presiones hacia las comunidades y líderes sociales afines a las FARC, además de la preocupación de su posible incidencia negativa en el proceso de reincorporación de los excombatientes.

Hacia finales del 2017 y principios de 2018, el diálogo con comunidades, autoridades locales y organizaciones humanitarias permitió observar un cambio sustancial en la perspectiva de amenaza del ELN. Durante 2017, estos actores señalaban a esta guerrilla como el principal riesgo para la implementación de las garantías de seguridad.

Diversas personas entrevistadas concuerdan en que lo anterior se ha traducido en el incremento de los homicidios selectivos en municipios como Tame, Saravena, Arauquita y Fortul.

En la actualidad el ELN consolidó su presencia en el territorio y es el actor con mayor control territorial. Este proceso de expansión también vino acompañado de una lucha con las disidencias por el control de las bases sociales que eran de las FARC.

Varios entrevistados sugieren que el ELN utilizó el cese al fuego, decretado entre octubre de 2017 y 9 de enero de 2018, para reestructurarse y traer tropas desde Venezuela hacia Arauca con el fin de reorganizarse y fortalecerse. También envió combatientes desde Arauca para consolidar su proceso de expansión en la frontera venezolana hacia el estado de Amazonas y a Cumaribo, en Vichada (ver Álvarez, Pardo, & Cajiao, 2018). Las alertas tempranas de inminencia del SAT para Saravena y Arauquita, advierten que, durante los primeros meses de 2018, el ELN incrementó las amenazas contra líderes sociales, representantes de Juntas de Acción Comunal, organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y población civil que no se sometieron a sus órdenes y lineamientos (Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, 2018; 2018a).

Desde la desmovilización de las FARC, el ELN inició un proceso de expansión hacia las zonas de mayor presencia de este antiguo grupo guerrillero

Este proceso de reorganización vino acompañado por la siembra de minas antipersonal con el fin de evitar el ingreso de Fuerza Pública a corredores estratégicos, lo que afecta a la población civil. Según organizaciones humanitarias consultadas, entre enero y abril de 2018, se presentaron nueve víctimas por nuevos campos minados por el ELN, principalmente en los municipios de Tame, Arauquita y Fortul.

Por otra parte, en la última visita realizada por la FIP en junio de 2018, el fortalecimiento de las disidencias cambió la perspectiva de los actores territoriales sobre el ELN. Desde finales de 2017 tomó mayor relevancia su consolidación y fortalecimiento, y hoy se perciben como el riesgo más determinante para la seguridad. Distintos actores en el territorio expresan preocupación por un sector de las FARC que salió de la zona veredal de Filipinas, en diciembre de 2016. Algunos de los excombatientes (según versiones, unos 15 hombres, entre ellos seis mandos medios o comandantes de escuadra), salieron del campamento por discrepancias con los comandantes y conformaron un grupo que, durante 2017, operaba en la zona de frontera (principalmente en La Victoria, Venezuela).

Hay versiones que apuntan a que esta estructura, compuesta principalmente por combatientes del Frente 10 con el apoyo del Frente 1, se viene fortaleciendo desde principios de 2018. En los últimos meses, se han presentado acciones de diversas subestructuras (entre tres y seis) que contarían con cerca de 150 hombres operando en Arauquita, entre Saravena y Fortul, Tame y Puerto Rondón (como se observa en el Mapa 1). De acuerdo con el SAT, esta facción armada tiene su centro de operaciones en Arauquita, en las veredas Santander (Puerto Tubo), Guayacán, Fundación, San Miguel y la Chigüira (Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, 2018a).

La disidencia estaría comandada por alias “Jerónimo”¹ y otros mandos que salieron de la cárcel y no participaron del proceso de reincorporación, por lo

que entrevistados señalan que hubo un mal manejo de comandantes amnistiados que no fueron tenidos en cuenta.

Según el informe del SAT y la información recopilada en terreno, esta disidencia estaría aumentando su pie de fuerza, al integrar las redes de milicias que no fueron registradas en las listas entregadas al Gobierno y sumando a los combatientes que salieron de las cárceles sin ser integrados al proceso, así como a excombatientes que están insatisfechos por el incumplimiento en la implementación (Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, 2018a). También se están fortaleciendo mediante la reconstrucción de las bases sociales que tenían las FARC en el territorio, logrando acercarse a líderes sociales de la antigua militancia fariana que están inconformes con el proceso.

Otro factor de riesgo para la reincidencia en el territorio es la inconformidad de algunos excombatientes con el proceso de paz por la falta de celeridad en la implementación. Los entrevistados concuerdan en la necesidad de avanzar pronto en los proyectos productivos para evitar que los excombatientes reincidan en actividades ilegales o se salgan del proceso de reincorporación. La percepción es que cada vez más abandonan el ETCR,² la mayoría jóvenes.



¹ Jerónimo hizo parte de los Frentes 28 y 10 (como segundo cabecilla), la columna móvil Alfonso Castellanos y luego fue comandante del Frente 56 de las FARC, con presencia en los departamentos del Casanare y parte de Boyacá (El Tiempo, 2004). Fue capturado en 2004 y gracias a la ley de amnistía salió de la cárcel; luego llegó a Arauca, donde no se integró al proceso de desmovilización y de ahí se fue para Venezuela, desde donde comanda la disidencia.

² Es importante señalar que, si bien han salido excombatientes del ETCR, no necesariamente se han ido a la disidencia. Los excombatientes que salen del ETCR toman distintas trayectorias (ver en Álvarez, Pardo & Cajiao, 2018); según actores cercanos al proceso, en su mayoría continúan su reincorporación, ya sea por la ruta individual de la ARN o porque simplemente volvieron a sus veredas donde están sus familias y continúan participando en las actividades del ETCR. Las personas que han salido del ETCR están identificadas y se les está haciendo seguimiento por parte de la ARN.

El reclutamiento ha sido otra de las fuentes de fortalecimiento de la disidencia: no solo está vinculando a niños, niñas y jóvenes colombianos, sino aprovechando las condiciones de vulnerabilidad e ilegalidad de la población migrante que llega desde Venezuela para reclutarlos. Colombianos y venezolanos son utilizados para transportar el contrabando, como informantes y combatientes. Entrevistados señalan que la falta de experiencia, entrenamiento y adoctrinamiento de estos jóvenes se ha traducido en un deterioro de la relación entre este grupo y la población civil con continuas agresiones y abusos.

Otro elemento a tener en cuenta es que la estrategia de seguridad planteada por el Acuerdo se enfoca en los Espacios Territoriales y en los esquemas particulares con los que cuentan ciertos líderes. Para el caso de Arauca, las Garantías de Seguridad fuera de los ETCR están determinadas por los intereses e interacciones entre los grupos armados, y los posibles acuerdos de no agresión entre estos y excombatientes.

La situación de las milicias y excombatientes que quedaron o se establecieron fuera del ETCR muestra la necesidad de estructurar estrategias de seguridad para esta población, ya que quedan en alto grado de vulnerabilidad por la presencia constante de actores armados. Eso es aprovechado por los distintos grupos para integrarlos y reclutarlos.

Además, surgieron amenazas de muerte en contra de los excomandantes que se encontraban en el Espacio Territorial (Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, 2018a).

Pero las acciones no se limitaron a las amenazas. Durante los primeros días de 2018, un integrante del partido político FARC fue atacado en Arauquita tras una emboscada de esta disidencia, en la que murió un civil. La caravana de la Unidad Nacional de Protec-

ción, de la que hacía parte el exguerrillero, se dirigía hacia el Espacio Territorial de Filipinas luego de una reunión sobre el Programa de Sustitución de Cultivos, PNIS (El Tiempo, 2018a). El más reciente hecho ocurrió el 28 de febrero de 2018, cuando alias “Richard”, disidente de las FARC, atentó contra un excombatiente que se encontraba dentro del ETCR de Filipinas (El Colombiano, 2018). Versiones encontradas señalan que el atentado es producto de rencillas internas, más que de acciones de las disidencias en contra de los excombatientes y del ETCR.

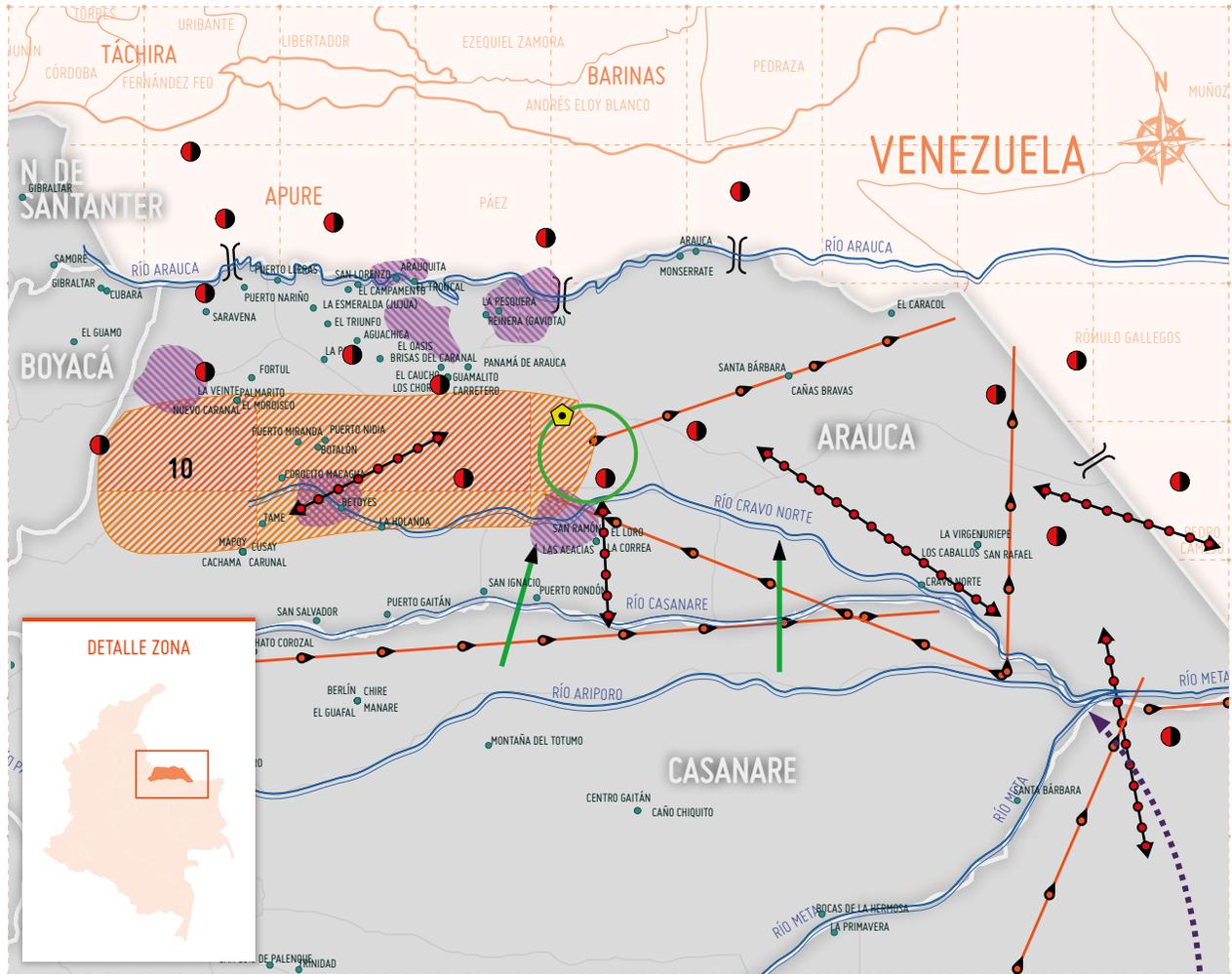
La última visita de la FIP al departamento de Arauca evidenció un cambio en las presiones de las disidencias en contra de los excombatientes. Con la salida del ETCR de uno de los ex comandantes del Frente Décimo, el nivel de amenaza en contra de la reincorporación política y social de ex miembros de las FARC ha disminuido considerablemente, ya que los disidentes y excombatientes se conocen y han constituido pactos para respetar el proceso de reincorporación.

Aun así, líderes sociales, organizaciones internacionales y funcionarios públicos, advierten sobre los posibles riesgos para los excombatientes derivados del fortalecimiento y expansión de las disidencias. Lo más preocupante es el posible deterioro de las relaciones y pactos de no agresión entre el ELN y los reductos de las FARC. Información obtenida en terreno revela que ya se han presentado al menos tres combates y las relaciones están cada vez más deterioradas. Esto puede derivar en el incremento de la violencia contra las comunidades, excombatientes y líderes cercanos a las FARC.

Las discrepancias entre estas estructuras radican en que comparten las mismas fuentes de financiación, y a que las disidencias están presionando a las

MAPA 1

DINÁMICAS TERRITORIALES EN ARAUCA 2017-2018



CONVENCIONES MAPA

- LÍMITE DEPTO
- LÍMITE MCPAL
- CENTROS POBLADOS
- CORREDORES DE TRÁFICO ILÍCITO
- ZONA DE CULTIVOS DE COCA
- PASOS ILEGALES IMPORTANTES (FIP)
- RÍOS

ESTRUCTURAS ARMADAS ILEGALES

- ZONAS DE INFLUENCIA DE LA DISIDENCIA DE LAS FARC
- ELN
- EXPANSIÓN DEL ELN
- POSIBLES MOVIMIENTOS DE OTROS GRUPOS ARMADOS
- POSIBLE MOVIMIENTOS DE LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC

OTROS

- ANTIGUA ZONA DEL FRENTE 10 DE LAS FARC
- ESPACIO TERRITORIAL DE CAPACITACIÓN Y REINSECCIÓN - FILIPINAS (ETCR)

Fuente: FIP

comunidades a pagar extorsiones en zonas donde el ELN tomó el control. También por la postura de las dos organizaciones frente al tema de la coca³ y por cuenta de los malos tratos que las disidencias le están dando a la comunidad, ya que los miembros reclutados recientemente, sin el adoctrinamiento necesario, están atropellando a la población.

Este enfrentamiento aumentaría significativamente el riesgo de los excombatientes y milicianos, ya que pueden ser percibidos por el ELN como colaboradores de la disidencia. Algunos funcionarios públicos advirtieron sobre la relación de los excombatientes con disidentes de las FARC. De acuerdo con la información suministrada, ex miembros de las FARC, que hacen su proceso de reincorporación fuera del ETCR, tienen contacto con los disidentes porque son de la zona y se conocen de tiempo atrás, lo que se convierte en un riesgo para la reincidencia.

El ELN, por su parte, no es percibido actualmente como una amenaza hacia el proceso de reincorporación, ya que hay un acuerdo entre esa guerrilla y los excombatientes para respetar la implementación del Acuerdo. Actores entrevistados señalan que miembros del Secretariado de las FARC y el COCE, se reunieron para acordar el respeto a la integridad física de los excombatientes y la implementación del Acuerdo en el territorio.

El fortalecimiento de la disidencia también se ha convertido en un riesgo potencial para las comunidades y la población civil. La disidencia está tratando de recomponer el poder de las antiguas FARC en algunas zonas del departamento, por lo que ha incurrido en desplazamientos, homicidios selectivos y presiones contra las comunidades y líderes para reestructurar sus bases sociales en los territorios de antiguo control fariano que ahora controla el ELN.

Miembros del Secretariado de las FARC y el COCE se reunieron para acordar el respeto a la integridad física de los excombatientes y la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio

• • • • •

³ En Arauca, el ELN históricamente ha tenido una postura muy fuerte en contra del narcotráfico, por lo que con la desmovilización de las estructuras armadas de las FARC presionaron la erradicación y sustitución de cultivos. Algunos entrevistados señalaron que las disidencias estaban incentivando nuevamente el cultivo de coca para su financiamiento. En este caso es importante tener en cuenta que Arauca no ha contado con grandes extensiones de cultivos.

2. Conflictos emergentes y no resueltos

Las Garantías de Seguridad en Arauca se implementan en un contexto donde la salida de las FARC y la disminución en la intensidad del conflicto generan nuevos conflictos sociales que pueden afectar los procesos de reincorporación. El papel de las FARC durante el conflicto armado, acompañado de transiciones incompletas que no permitieron solucionar viejas rencillas entre los combatientes, ocasionó que continuaran conflictos no resueltos entre los actores armados, que ponen en riesgo la integridad de los excombatientes.

La manera como las FARC se relacionan con las comunidades cercanas a Filipinas y las víctimas, puede generar un escenario de riesgo por la exacerbación de conflictividades. Dicha interacción tiene que ver con la lucha por la tierra y la intención de los excombatientes de hacer un proceso de reincorporación colectiva en la zona. El conflicto histórico por la tierra entre campesinos e indígenas Hitnü, choca con el propósito de conformar una comunidad “fariana”.

La titulación y formalización de la tierra también han tomado mayor relevancia. El fallido proceso de colonización en la década de los setenta, tuvo como efecto fuertes tensiones por la ocupación de la tierra entre colonos campesinos e indígenas. Ante la ausencia del Estado, estos grupos se vieron obligados a organizarse de manera autónoma en cooperativas de productores, juntas de acción comunal, asociaciones agrícolas y cabildos indígenas para catalizar sus diferencias y protestar en contra de un modelo considerado débil por la falta de políticas públicas claras de reforma agraria (Gutiérrez, 2009).

El conflicto social por la tierra se expresa en la tensión entre la expansión de territorios indígenas protegidos legalmente, la titulación de predios a

campesinos y el aumento de los títulos de explotación petrolera. La comunidad indígena Hitnü, que se encuentra en el área de influencia del ETCR, pretende expandir su territorio. En contraposición, se encuentran los campesinos colonos que no quieren ser reubicados y esperan la titulación de las tierras que han trabajado por años. Cabe mencionar que en esta zona hay predios con medidas cautelares que están esperando resolución para la restitución de tierras a personas desplazadas.

Tanto Tame como Araucita cuentan con solicitudes de restitución de tierras despojadas. Según las cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, entre 2011 y julio de 2018, se realizaron 583 solicitudes en estos municipios, zonas de influencia del ETCR, para un total de 512 predios (Unidad de Restitución de Tierras, 2018). El Sistema de Alertas Tempranas resalta que el proceso de reclamación y restitución ha sido demorado, por lo que algunas de las víctimas habrían acudido al ELN para tramitar procesos fuera de la institucionalidad, casos que, seguramente, terminarán fallando en favor de quienes simpatizan o favorezcan los intereses del grupo guerrillero (Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, 2017, pág. 16).

El conflicto social por la tierra se expresa en la tensión entre la expansión de territorios indígenas protegidos legalmente, la titulación de predios a campesinos y el aumento de los títulos de explotación petrolera

Tal y como aseguró un excomandante de las FARC entrevistado, se quiere hacer un proceso de reincorporación colectiva en la vereda Filipinas, donde se pretende establecer un “pueblo fariano”. El acceso a la tierra es fundamental para la reintegración social y económica de los excombatientes, pues es la base para implementar los proyectos productivos. Por eso, el reto más importante que tiene el Gobierno con la implementación de los acuerdos es conciliar esta necesidad con los conflictos por la tierra en el departamento. Lo cierto es que la titulación de terrenos puede convertirse en un obstáculo para la reintegración de los excombatientes, al exacerbar los conflictos existentes y generar riesgos para su integridad física y la de sus familias por cuenta de las represalias.

Otro elemento a tener en cuenta es que, en territorios como Arauca, donde la confrontación armada entre los actores ha sido intensa, quedaron conflictos no resueltos. Esto tiene un impacto sustancial en la seguridad de mandos o comandantes que tuvieron papeles determinantes durante la confrontación. Es así como la reincorporación se enmarca en procesos de transición que no han solucionado estas viejas rencillas, convirtiéndose en un riesgo materializado en homicidios y amenazas hacia los excombatientes.

Las agresiones contra los desmovilizados no tienen una dinámica clara y sistemática que permita dilucidar sus motivaciones. En los relatos de los entrevistados se lograron evidenciar cuatro posibles móviles: viejos conflictos entre combatientes que quedaron de la guerra entre el ELN y las FARC; venganzas personales de las disidencias; retaliaciones de miembros de la Fuerza Pública por secuelas de la confrontación armada, y luchas internas de las FARC por el control del poder político.

Para organizaciones internacionales y funcionarios públicos, la guerra que libraron el ELN y las FARC entre 2006 y 2010 (ver Fundación Ideas para la Paz,

2014), dejó importantes cicatrices y secuelas que aún no se han saldado, lo que explicaría el asesinato de exguerrilleros a manos del ELN. Los homicidios de personas cercanas a las FARC no necesariamente son prueba de una política del ELN de atacar y asesinar a los excombatientes, sino que estarían asociados a venganzas producto del enfrentamiento, más no de una decisión de afectar el proceso de reincorporación de las FARC.

Un ejemplo es la muerte de un reconocido miliciano que no fue inscrito en las listas y tampoco hacía parte del proceso de desmovilización y reincorporación: Brutney Alfonso Ávila Snak, asesinado en Puerto Jordán, municipio de Tame (Caracol Radio, 2017). Una de las versiones sugiere que su muerte tiene que ver con viejas rencillas con miembros del ELN. Según la fuente, Ávila mató al padre de un miembro de esa guerrilla, quien luego lo asesinó.

Su muerte revela el problema de fondo frente a la seguridad de sectores cercanos a las FARC que no fueron incluidos en el proceso y se encuentran en zonas con presencia de otros actores armados, ya que no gozan de las medidas de protección estipuladas en el Acuerdo. Según un funcionario público, la postura del Gobierno ha sido la de proteger a los excombatientes dentro del ETCR y a los líderes políticos que salen de este espacio mediante los esquemas de protección.

Este señalamiento deja entrever la incapacidad del Estado de estabilizar y tomar el control de los territorios para proveer seguridad, no solo a los excombatientes sino a sus familias y comunidades.

Otra de las posibles hipótesis sobre las agresiones está determinada por las relaciones y conflictos que surgieron dentro de las filas de las FARC durante la guerra. Los conflictos internos entre combatientes eran dirimidos por las estructuras de mando y reglamentos internos. Con la desmovilización, las estruc-

turas de mando y reglamentos perdieron legitimidad, lo que puede ocasionar que estos conflictos tengan otras formas de resolución.

Por otro lado, el asesinato de José Vicente Carvajal Isidro, alias 'Misael'⁴, dejó ver otras motivaciones tras las amenazas y homicidios a desmovilizados. Misael fue asesinado cerca del ETCR en la vía que conduce de la vereda Filipinas a Galaxia, el 7 de mayo de 2018 (El Espectador, 2018). Una de las hipótesis que se manejaban sobre este caso es que su muerte podría ser producto de los enemigos que creó por cuenta de su carácter "sanguinario y agresivo" durante su paso por las FARC, y su papel determinante en el enfrentamiento con el ELN.

Otra de las hipótesis relaciona a la Fuerza Pública con el homicidio. De acuerdo con esta perspectiva, la muerte de Misael sería producto de venganzas por parte de miembros que se vieron afectados por el accionar armado de las unidades bajo su mando. Cabe destacar que los entrevistados advirtieron que esa muerte pudo darse producto de una venganza personal o de algún sector de la Fuerza Pública, más no por una política de las Fuerzas Militares contra los desmovilizados de las FARC.

Por último, otra de las hipótesis es que el asesinato de Misael es producto de luchas internas entre los comandantes de las FARC por el poder político y el control de las organizaciones sociales.

Si bien la Fiscalía y demás autoridades encargadas son quienes deben establecer el autor y las motivaciones de los asesinatos de excombatientes, los casos y elementos expuestos ponen sobre la mesa la importancia de tener en cuenta la historia del conflicto en la región y el papel que tuvieron los mandos y comandantes. Son factores determinantes en el nivel de riesgo que tienen los excombatientes en un escenario de transición.



⁴ 'Misael' fue segundo cabecilla del Frente 10 y contaba con una importante ascendencia dentro de los guerrilleros y las bases sociales.

3. Agresiones a líderes sociales en medio de la confrontación de los grupos armados ilegales por tomar el control social y territorial

La amenaza y asesinato de líderes sociales es uno de los temas más preocupantes para la implementación de las Garantías de Seguridad. La dimensión del fenómeno se presenta en distintos territorios con diferente intensidad, motivaciones y características. En Arauca, la percepción es que las amenazas y asesinatos han aumentado en el último año, a pesar de las bajas cifras con las que cuenta el departamento en comparación con otros territorios.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, muestran 14 asesinatos de líderes sociales en el departamento. En los informes de Somos Defensores, entre 2016 y 2017, se presentaron tres homicidios a líderes sociales, uno de ellos perpetrado por el ELN. Entre enero y marzo de 2018 se registraron otros tres homicidios (Somos Defensores, 2016; 2017; 2018). El seguimiento a agresiones a líderes realizado por la FIP muestra que en 2016 se presentó un homicidio, mientras que en 2017 tan solo una tentativa de homicidio. Al 13 de septiembre de 2018, se registraron cuatro asesinatos, un secuestro y una tentativa de homicidio. Si bien las cifras no son tan elevadas como en otras zonas del país, sí muestran un aumento en las agresiones.

Organizaciones internacionales, líderes sociales y funcionarios públicos coinciden en señalar que, si bien es evidente el aumento en las agresiones, no hay claridad sobre los autores y las motivaciones, debido

a que se acusa al ELN, a las disidencias y a estructuras paramilitares que se asocian a las acciones de la Fuerza Pública.

La versión más recurrente entre funcionarios públicos y organizaciones internacionales es que este incremento está relacionado con la lucha entre el ELN y las disidencias por el control de las comunidades y organizaciones sociales, sobre todo por los liderazgos comunitarios y sectores afines a las antiguas FARC. Es preciso señalar que los líderes sociales —principalmente los de organizaciones de base como las Juntas de Acción Comunal (JAC)— han sido afectados históricamente por los grupos armados, debido a que el control de estos liderazgos y los procesos organizativos que promueven son fundamentales para la construcción de bases sociales, así como el control de la población y el territorio.

En Arauca las presiones y asesinatos de líderes sociales están asociados a la expansión del ELN hacia territorios de antigua presencia de las FARC y al proceso de fortalecimiento de las disidencias. Como advirtió la Defensoría del Pueblo en sus alertas tem-

Las cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, muestra 14 asesinatos de líderes sociales

pranas de inminencia del SAT para Saravena y Arauquita, el ELN incrementó las amenazas contra líderes sociales, representantes de JAC, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, entre otros (Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, 2018; 2018a) como una forma de tomar el control de las comunidades y territorios de antiguo control de las FARC.

El proceso de fortalecimiento y ocupación del territorio por parte de las disidencias ha venido acompañado de fuertes presiones sobre los líderes sociales que eran considerados afines a las antiguas FARC⁵ para reestructurar las bases sociales y recuperar el poder político. Según organizaciones internacionales y funcionarios públicos, la expansión territorial del ELN trajo consigo un proceso de reorganización de los liderazgos, en el que líderes afines a las FARC trabajaban para el ELN o se apartaron de las líneas políticas de la ex guerrilla. Con la llegada de las disidencias estos liderazgos están siendo presionados —también por el ELN— para vincularse a su proyecto político. Las amenazas se focalizan en los liderazgos que tuvieron cercanía con las FARC y que el ELN absorbió en su proceso de expansión territorial.

Varios líderes sociales entrevistados señalan que las acciones del Gobierno son escasas e insuficientes, por lo que han tenido que tomar medidas de autoprotección (como tener cuidado al difundir información o no denunciar directamente a los actores armados), y promover formas alternativas de protección, como las Guardias Campesinas.

El proceso de fortalecimiento y ocupación del territorio por parte de las disidencias ha venido acompañado de fuertes presiones sociales sobre los líderes sociales que eran considerados afines a las antiguas FARC

•••••

⁵ La confrontación armada ha creado una compleja red de relaciones entre los actores ilegales y las comunidades, en las cuales no siempre es fácil discernir el papel de los líderes sociales. Esto ha llevado a la estigmatización de los liderazgos, perdiendo de vista el contexto en el cual se desarrolla la interlocución con los grupos armados como las FARC, donde las motivaciones de relacionarse pueden ir desde afinidades en las agendas sociales y políticas, hasta estrategias de sobrevivencia o de intermediación de los líderes entre los grupos armados y las comunidades.

4. El papel de las FARC en las Garantías de Seguridad

Un factor importante que evidenció el proceso de Desarme, Desmovilización y Reincorporación es el papel fundamental que cumplen la FARC en la transición e implementación de las Garantías de Seguridad para sus excombatientes. En el caso de Arauca se lograron identificar dos elementos importantes: su relacionamiento con las comunidades y demás actores civiles en el territorio, y el papel determinante que cumplen sus liderazgos en las Garantías de Seguridad.

Con la evolución del proceso de reincorporación, también se van transformando los riesgos. Durante los primeros meses de esta investigación, distintos actores señalaban el importante papel de las FARC en su seguridad, principalmente en su proceso de reincorporación social. En este caso, los entrevistados advertían sobre el posible riesgo que podía generar el relacionamiento que estaban tendiendo los ex miembros de las FARC con las víctimas y sectores de la comunidad que se acercaron a pedir explicaciones e información.

La información obtenida en campo sugiere que el tratamiento que excombatientes de las FARC les dieron a las familias víctimas de reclutamiento y desaparición que reclamaban información sobre sus familiares, podía convertirse en un riesgo. En el caso de Arauca, hay preocupación por la forma cómo las FARC les estaban respondiendo a las personas que se acercaban a la zona veredal (hoy ETCR) a buscar información sobre sus familiares, ya sea porque fueron reclutados o desaparecidos.

Las respuestas genéricas a los reclamos de las víctimas y la poca información suministrada por las FARC causaron malestar, inconformidad y desconfianza. Para un representante de una organización humanitaria, el tema de la verdad y las garantías para

el acceso a la información son fundamentales, por lo que esta actitud tenía un claro efecto en su seguridad y proceso de reincorporación.

Si bien este riesgo no se ha materializado, plantea una importante discusión sobre el papel fundamental de las FARC en los procesos de transición y reconciliación. La forma como estos grupos se relacionan con distintos sectores sociales, como las víctimas y comunidades cercanas, tiene implicaciones claras sobre la seguridad. Los fallidos procesos de reconciliación pueden traer retaliaciones o venganzas por parte de las víctimas o sectores que se hayan visto afectados por el conflicto.

Por otro lado, la evolución del proceso de reincorporación y el fortalecimiento de las disidencias han evidenciado el papel de los liderazgos en las garantías y condiciones de seguridad. De acuerdo con la información obtenida en terreno, uno de los riesgos para los excombatientes ha sido el frágil liderazgo de ciertos excomandantes. Los entrevistados manifiestan que el carácter de los líderes, los manejos inadecuados de las milicias y los excarcelados, la falta de legitimidad dentro de la guerrilla y la mala rela-

En Arauca, varios entrevistados manifestaron su preocupación por la forma como las FARC les estaban respondiendo a las personas que se acercaban a la zona veredal a buscar información sobre sus familiares

ción de algunos comandantes con los excombatientes, trajeron consecuencias negativas para la seguridad, divisiones y pugnas dentro de las FARC, además de fracturar las bases sociales.

Uno de los grandes tropiezos del proceso de desmovilización y reincorporación ha sido el carácter intransigente y poco político de uno de los comandantes, responsable de la antigua zona veredal. Esto se tradujo en el mal manejo del proceso de reconocimiento de integrantes de las FARC —principalmente sectores de milicias— y divisiones internas entre los comandantes y las bases, lo que ha influido en el crecimiento de las disidencias.

Situación similar vivieron excarcelados de las FARC que llegaron al territorio y no fueron registrados por el comandante de la zona. El no reconocimiento por parte de las FARC de esta población generó malestar frente al proceso y hacia los comandantes, lo que fue aprovechado por las disidencias para incorporarlos a su proyecto militar y fortalecerse.

El frágil liderazgo de algunos comandantes también generó divisiones y fracturas internas en los procesos de reincorporación colectivos planteados en el Acuerdo. Estas divisiones también se han traducido en la fragmentación de las bases sociales y sus liderazgos. Según uno de los entrevistados, actualmente las bases están divididas entre dos facciones, lo que ha generado pugnas por el control de las organizaciones sociales para imponer una línea política.

Estas divisiones internas se han convertido en un riesgo para la integridad de los excombatientes. Como se señaló anteriormente, una de las hipótesis que toma mayor relevancia en la muerte de “Misael” es que su homicidio está relacionado con las luchas internas entre facciones políticas por el control de organizaciones sociales que son la base del proyecto político de las FARC. Si bien la Fiscalía está en proceso de determinar los móviles del caso, esta hipótesis pone de manifiesto los posibles efectos de liderazgos frágiles.

Por último, está la desconexión de los liderazgos a nivel central con los ETCR y los guerrilleros de bajo rango. En este caso, Arauca da muestra de los efectos negativos que genera la falta de comunicación entre los líderes de mayor rango y las bases guerrilleras. Según la información obtenida en campo, esta desconexión, sumada a los retrasos en la implementación en los procesos de reincorporación económica, generó en los excombatientes del ETCR la percepción de una implementación diferenciada que favorece a los comandantes. Esto causó descontento y desconfianza, además de una división y facturación interna en el proyecto de una reincorporación colectiva, como se planteó en el Acuerdo. Según un funcionario público, ya se están empezando a notar tensiones entre los líderes del partido a nivel central con los mandos y excombatientes rasos que se encuentran en el ETCR.

Si bien el liderazgo no afecta directamente a las comunidades, las decisiones que estos tomen sí afectan las condiciones de seguridad, en este caso el fortalecimiento de las disidencias. Cabe resaltar que los elementos mencionados en este apartado ponen en evidencia el papel preponderante que tiene el partido FARC y sus procesos internos en la implementación de las Garantías de Seguridad.

5. La competencia por el poder político con un actor que continúa en armas

El contexto actual de Arauca continúa presentando riesgos para las garantías de participación política de las FARC, tanto por la presencia del ELN, como de la disidencia. La consolidación del ELN entra a competir con la nueva fuerza política por el control del poder local, que ha sido influenciado históricamente por esta guerrilla en gran parte del departamento. La información recopilada en terreno señala que el nivel de amenaza disminuyó, ya que no se han presentado acciones de esta guerrilla contra miembros del partido FARC. Sin embargo, esta situación puede cambiar durante las elecciones de alcaldes y gobernadores, donde se disputarán los poderes locales y los recursos públicos que han sido fuente de financiación del ELN.

Según funcionarios públicos, líderes sociales y organizaciones internacionales, el ELN está respetando el pacto de no agresión establecido con los comandantes de las FARC antes de su desmovilización. Sin embargo, las garantías para la participación política de las FARC van a estar determinadas por la percepción que tenga el ELN sobre el poder político que pueda obtener el partido FARC.

Aun así, hubo rumores sobre posibles restricciones de participación política que recibieron excombatientes en algunos municipios. Según una organización humanitaria entrevistada, los excombatientes son autorizados para quedarse mientras no tengan ningún tipo de trabajo o participación en los espacios políticos de las comunidades (como la participación en las JAC o cualquier otra expresión política a nivel micro local).

Durante el último viaje al departamento, en junio de 2018, se conoció que este rumor fue momentáneo. Si bien no se logró recopilar más información al respecto, esta situación pone de manifiesto los riesgos a nivel territorial que puede tener la intervención de desmovilizados en los distintos niveles de participación política. Es evidente la necesidad de incluir en el debate sobre Garantías para la Participación Política las medidas para garantizar la seguridad de excombatientes que participen en escenarios políticos dentro de sus comunidades, como las Juntas de Acción Comunal y otros procesos organizativos. Ese escenario de participación política representa riesgos y amenazas diferenciados que deben ser abordados con estrategias distintas.

Otro de los riesgos para la participación política de las FARC es el fortalecimiento de las disidencias, las cuales han atentado en contra de algunos comandantes y líderes del partido político. Según entrevistados, este grupo mantiene un discurso de continuidad con la lucha revolucionaria y se hacen llamar las “verdaderas” o “auténticas” FARC-EP, mientras señalan como “disidentes” a quienes dejaron las armas y se integraron al partido político. Con el atentado contra la caravana en que se movilizaba un líder político del partido FARC, el 22 de enero de 2018, se pensaba que este discurso mostraba un rechazo hacia el partido y que las disidencias iban a afectar el proceso de participación política de las FARC.

Aún así, la información recopilada durante 2018 hace referencia a que las agresiones que se presentaron en contra de miembros del partido, como Juan Torres —quien iba en la caravana atacada—, obedecen más a conflictos personales con estos líderes que a una estrategia de afectar el proceso de conformación del partido político (particularmente contra el excomandante Efrén y excombatientes cercanos a él).

Como se puede observar, la participación política en un territorio como Arauca —donde persisten los actores armados y han tenido una fuerte influencia sobre los escenarios políticos del departamento—, se da en un contexto dominado por un grupo que aún continúa en armas y otro que está consolidando sus bases sociales. La participación de ex miembros de las FARC y sectores de la comunidad que tomen la bandera del nuevo partido estará influenciada por los intereses y la percepción de riesgo de los actores armados. Por esta razón es importante tomar medidas de protección, principalmente en las elecciones locales que afectarán directamente los intereses políticos y económicos de los grupos armados.



**La participación política
en Arauca, donde
persisten los actores
armados, se da en un
contexto dominado por un
grupo que aún continúa
en armas y otro que está
consolidando sus bases
sociales**





**REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS**

Referencias bibliográficas

Álvarez, E., Pardo, D., & Cajiao, A. (7 de marzo de 2018). Las disidencias de las FARC: un problema en auge. Fundación Ideas para la Paz (FIP). Disponible en http://ideaspaz.org/media/website/FIP_Disidencias_Final.pdf

Caracol Radio. (18 de agosto de 2017). Asesinan a desmovilizado de las Farc en Puerto Jordán, Tame. Recuperado el 20 de agosto de 2017, de http://caracol.com.co/radio/2017/08/17/regional/1502983956_405750.html

Ejercito Nacional. (11 de mayo de 2017). Ejército destruyó depósito ilegal de explosivos del Eln. Recuperado el 20 de junio de 2018, de <https://www.octavadivision.mil.co/?idcategoria=413309>

El Colombiano. (1 de marzo de 2018). Disidencias dispararon a miembro de Farc en la zona veredal en Arauca. Recuperado el 20 de junio de 2018, de <http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/disidencias-dispararon-a-miembro-de-farc-en-la-zona-veredal-en-arauca-HN8285081>

El Espectador. (8 de mayo de 2018). FARC denuncia asesinato de excombatiente en Arauca. Recuperado el 8 de mayo de 2018, de <https://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-denuncia-asesinato-de-excombatiente-en-arauca-articulo-754526>

El Tiempo. (30 de agosto de 2004). Ejército capturó al jefe del frente 56 de las Farc. Recuperado el 20 de junio de 2018, de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1550023>

El Tiempo. (20 de abril de 2018). Denuncian presencia de guerrilleros del Eln en Cumaribo (Vichada). Recuperado el 1 de Febrero de 2018, de <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/denuncian-presencia-del-eln-en-cumaribo-en-vichada-201326>

El Tiempo. (22 de enero de 2018a). Disidencias, tras ataque a comisión política de Farc en Arauca. Recuperado el 1 de Febrero de 2018, de <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/atacan-a-comitiva-del-partido-politico-farc-en-araucita-173716>

Fundación Ideas para la Paz. –FIP- (2014). Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario. Unidad de análisis siguiendo el conflicto. Boletín (73). Disponible en <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53e2ac3725816.pdf>

Gutiérrez, O. J. (2009). Arauca: un territorio de contrastes. Controversia(192).

La Paz en el Terreno. (2018). La Paz en el Terreno. Disponible en: <http://lapazenelterreno.com/node/122>

Sistema de Alertas Tempranas -SAT-. (2017). “Informe de Riesgo N° 017-17. Defensoría del Pueblo.

Sistema de Alertas Tempranas -SAT-. (2018). Alerta Temprana de Inminencia No. 006-18, Saravena. Defensoría del Pueblo.

Sistema de Alertas Tempranas -SAT-. (2018a). Alerta Temprana de Inminencia No. 0013-18, Arauquita. Defensoría del Pueblo.

Somos Defensores. (2016). Contra las cuerdas: informe anual del Sistema de información sobre agresiones contra defensores de DDHH en Colombia. Bogotá: Programa Somos Defensores.

Somos Defensores. (2017). Piedra en el zapato: informe anual 2017 del Sistema de información sobre agresiones contra defensores de DDHH en Colombia. Bogotá: Programa Somos Defensores.

Somos Defensores. (2018). Agresiones contra Defensores(as) de Derechos Humanos en Colombia, enero – marzo 2018. Bogotá: Programa Somos Defensores.

Unidad de Restitución de Tierras. (2018). Recuperado el 14 de septiembre de 2018, de <http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras>



Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Calle 100 No. 8A – 37 Torre A. Of. 305.
Bogotá Tel. (57-1) 218 3449
www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

-
- Con el apoyo de:
-

